

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio Nro. _____

CONJUEZ PONENTE: RODRIGO JAVIER ROZO

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE	76001-23-33-000-2020-01284-00
DEMANDANTE	HENRY ALBERTO DIAZ NAVAS y otros oscareabogado@gmail.com
DEMANDADO	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
ASUNTO:	DECLARAR FALTA DE COMPETENCIA Y DEVOLVER POR COMPETENCIA

I. ANTECEDENTES

Los señores Henry Alberto Díaz Navas, Diego Felipe Fernández Córdoba, Eder Guillermo Burbano Gómez y Magdalena María Contreras Uribe a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, pretenden¹ que se declare que los demandantes tienen derecho a la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998 y Decreto 1102 del 2012 en un reajuste al 80% de los magistrados de las Altas Cortes incluyendo en la prima especial de servicios que estos perciben las cesantías, sus intereses y todos los ingresos laborales pagados a un Congresista; se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en: Oficio nro. S-2018-005901 del 23 de octubre de 2018, Oficio nro. S-2018-005906 del 23 de octubre de 2018, Oficio nro. S-2018-005905 del 23 de octubre de 2018, y Oficio nro. S-2018-005900 del 23 de octubre de 2018, mediante los cuales se negó el reconocimiento, reajuste y reliquidación de la prima especial de servicios y reliquidación de salarios y demás prestaciones laborales.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconozca, reliquide y pague las diferencias salariales, prestacionales y laborales entre el valor pagado por concepto de bonificación por compensación y el que se debió pagar al incluirse en su establecimiento las Cesantías y sus intereses, que resulten de la reliquidación de los mismos durante todos los periodos en los que se han desempeñado como Procuradores Judiciales II para asuntos penales en Cali, teniendo como base para la liquidación el 80% de lo que por todo concepto devenga un Magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima especial de servicios contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992; hacer declaraciones ultra y extra petita por los derechos ciertos e irrenunciables; se condene en costas y en agencias en derecho; reajustar y actualizar valores reclamados.

Mediante auto interlocutorio nro. 384 del 30 de abril de 2019², el Juzgado Primero Administrativo de Cali manifestó el impedimento para conocer del asunto, el cual fue declarado infundado mediante providencia del 30 de mayo de 2019³ por el Tribunal Administrativo del Valle.

¹Ver folios 1 vuelto del expediente físico

² Ver folio 59 del expediente físico

³ Ver folios 64 – 65 del expediente físico



RADICACIÓN : 76001-23-33-000-2020-01284-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Accionante : HENRY ALBERTO DIAZ NAVAS y otros
Accionado : PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

2

A través de auto interlocutorio nro. 921 del 22 de agosto de 2019⁴, el Juzgado Primero Administrativo de Cali admitió la demanda y ordeno notificar.

Una vez contestada la demanda, surtido el traslado de las excepciones, mediante auto interlocutorio 497 del 2 de julio de 2020⁵, el Juzgado Primero Administrativo de Cali declaró la falta de competencia por el factor cuantía.

II. CONSIDERACIONES

Respecto a la estimación de la cuantía, el Consejo de Estado⁶ recordó que la fijación de los perjuicios causados tiene como finalidad determinar quién es el juez competente para conocer de un determinado proceso. Sobre el particular se ha expresado que:

“Cuando en la demanda se formulen varias pretensiones, la cuantía del proceso se determinará por el monto de la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes. Así, se tiene que los perjuicios por daño moral, daño emergente y lucro cesante son pretensiones autónomas entre sí y respecto de cada demandante, por lo tanto no se pueden sumar para efectos de determinar la cuantía de las pretensiones formuladas por cada uno de ellos”⁷. (subrayas por fuera de texto).

Al momento de estudiar la competencia funcional se debe analizar de manera individual cada una de las pretensiones y así determinar si es dable admitir o no la demanda.

El artículo 155 numeral 2 del CPACA vigente al momento de radicarse el proceso, establecía:

“ART. 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2º. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En el presente caso la estimación de la cuantía se obtiene de la diferencia que resulta de lo que se pretende y del valor que se pagó. Así las cosas, la parte demandante reclama diferencias salariales, prestacionales y laborales entre el valor pagado por concepto de bonificación por compensación y el que se debió pagar al incluirse en su establecimiento las Cesantías y sus intereses, por valor de \$41.133.644⁸, no obstante, la demanda fue radicada en el año 2019 conforme al acta individual de reparto visible a folio 57 del expediente físico y no el año 2018 como lo manifestó la Juez Primera Administrativa de Cali, por lo tanto, para ese momento la cuantía se establecía en \$41.405.800 y es inferior a los 50 SMMLV⁹.

⁴ Ver folio 67 del expediente físico

⁵ Ver folios 103 a 105 del expediente físico

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, C.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, providencia 19 de febrero de 2019, Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00197-00(62962).

⁷ Consejo de Estado, auto de 28 de marzo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En igual sentido se ha pronunciado el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E) en auto de 2 de mayo de 2016.

⁸ Ver folio 13

⁹ Salario mínimo 2019 (\$828.116 * 50 = **\$41.405.800**)



RADICACIÓN : 76001-23-33-000-2020-01284-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Accionante : HENRY ALBERTO DÍAZ NAVAS y otros
Accionado : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

3

Por lo anterior, debe aplicarse el numeral 2 del artículo 155 del CPACA y la competencia para conocer en primera instancia el presente asunto radica en los juzgados administrativos.

En consecuencia, al no ser esta Corporación la competente para conocer el presente proceso, estima el Despacho que el juez de conocimiento en el trámite procesal subsiguiente deberá tener en cuenta lo previsto en el inciso tercero del artículo 139 del Código General del Proceso, por lo cual se ordenará devolver el expediente al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali, para que en esa instancia se continúe conociendo el presente asunto.

En consecuencia; se,

R E S U E L V E:

PRIMERO.- DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA en razón de la cuantía, para tramitar el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO.- DEVOLVER el expediente al Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali, para que continúe con el conocimiento del mismo.

TERCERO: Por Secretaría de esta Corporación realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

(Firmado electrónicamente)
RODRIGO JAVIER ROZO
Conjuez